

Democracia participativa: ¿desde arriba o desde abajo?

Margarita López Maya

La derrota sufrida en diciembre pasado por el gobierno, ha provocado un interesante giro en nuestro proceso sociopolítico. A diferencia de 2007, cuando el Presidente profundizó el discurso de la polarización y acentuó tendencias de centralización, este año su discurso ha cambiado un poco. No es que el gobierno haya cejado en su propósito de conducirnos al socialismo del siglo XXI, pero ahora muestra moverse con mayor cautela y sentido político. Desarrolla tácticas que en lo inmediato buscan mejorar la imagen de su desempeño gubernamental tanto a nivel nacional como en las gobernaciones y alcaldías, con vista a no perder terreno en las elecciones de noviembre.

Siguiendo su olfato y las encuestas, entre las tácticas gubernamentales pueden señalarse la importante amnistía que se otorgó a parte de quienes lo confrontaron insurreccionalmente entre 2002 y 2003, los cambios de gabinete y la reactivación de la reforma policial orientada por los informes de la Conarepol. También ha conversado e indemnizado a propietarios y productores del campo, en un esfuerzo por levantar la producción, postergó la aprobación de la reforma educativa, e importa toneladas de comida que subsidia para cerca de la mitad de la población que sigue asediada por la pobreza y empleos de mala calidad. Mientras tanto, en sentido estratégico, siguen las nacionalizaciones, como también el equipamiento a la reserva o milicia bolivariana, así como la creación y entrega de recursos a los consejos comunales. En este juego de ajedrez, el gobierno mueve peones, alfiles o algún caballo, pero en definitiva mantiene su mismo juego en espera de las reacciones, no sólo de las fuerzas de oposición sino del electorado mismo, que este noviembre, a través de su voto en las elecciones regionales y locales, indicará si la derrota en 2007 fue un traspie superado, el inicio de una tendencia a la estabilización o del declive del bolivarianismo.

En este contexto es muy importante prestarle atención a la descentralización y su relación con la democracia participativa y protagónica que consagró la Constitución de 1999. En los primeros años del gobierno de Chávez, la

participación estuvo concebida como una combinación de democracia representativa con mecanismos de democracia directa y semidirecta en distintos niveles y esferas del Estado. Se trataba de complementar las instituciones de la representación con instituciones que permitieran la participación directa o semidirecta de la gente en la toma de decisiones del Estado. Se entendió la participación como *empoderamiento* –autonomía, ciudadanía plena– y, al mismo tiempo, como recurso para hacer más eficiente la acción estatal mediante la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, por la convergencia de saberes, intereses y esfuerzos. Sin embargo, en la práctica esa matriz conceptual cambió en medio de las vicisitudes del álgido enfrentamiento político vivido entre 2001 y 2004. Hacia 2005 emergió esta concepción “socialista”, que tendió a debilitar los principios e instituciones de la representación para promover una democracia “directa”. Se abrió una tendencia a pensar al poder popular, no como poder autónomo que interactúa con el Estado, sino como parte de éste, brazo ejecutor de políticas públicas decididas desde arriba y por unos pocos.

Coordiné hace poco un tema central para la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales donde se examinan estas contradictorias tendencias de la participación “desde arriba” y “desde abajo” que viene desarrollándose en los espacios participativos abiertos por el primer gobierno bolivariano (1999-2007). El conjunto de artículos que saldrán publicados se apoyan en su mayoría en investigaciones teóricas y empíricas que lograron sortear el perverso juego de la polarización, que al igual que todo en nuestro país, invadió y debilitó la calidad de mucho de su producción académica. Los autores son Steve Ellner, María Pilar García, Alberto Lovera, Daniel Hellinger, Dorotea Melcher y yo, así como Julia Buxton y Jennifer McCoy, quienes hacen un artículo de comentarios sobre los otros artículos. Son ellos(as) académicos de amplia trayectoria y lograron en sus pesquisas pasar revista a tensiones y tendencias que se debaten en el seno del *chavismo* con respecto a los contenidos de lo “participativo” de nuestra democracia.

Al examinar innovaciones participativas exitosas y/o emblemáticas que el gobierno viene impulsando como mesas técnicas de agua, cooperativas y

consejos comunales, se detecta una fuerte disputa entre dos enfoques. Por un lado, prácticas que entienden que sólo propiciando un desarrollo descentralizado y desde las bases y la sociedad –respetando y apoyando la autonomía y autodeterminación de las organizaciones que se crean– puede mejorarse la calidad de la democracia. Y, por otro lado, acciones gubernamentales que porfían en fortalecer tendencias centralizadoras y a incorporar las organizaciones populares al Estado “socialista”, propiciando su cooptación y reduciendo su potencial democratizador. La ley de los Consejos Comunales de abril de 2006 tiene bases para ambos enfoques, aunque tiende más al segundo modelo y de hecho, el énfasis puesto por el gobierno en consolidar esta modalidad participativa, ha venido debilitando las otras, reduciendo la diversidad que percibimos en el primer gobierno del Presidente. La recentralización y concentración de poder en la Presidencia en desmedro de los niveles subnacionales, expresadas en esa ley, lesionan el potencial democratizador de la participación en espacios microlocales.

En varios de esos artículos se presentan resultados de investigación que comienzan por indagar qué entienden por participación protagónica quienes se han venido incorporando a este proceso, de qué manera estas prácticas participativas explican la popularidad del Presidente, así como, qué tanto en verdad están mejorando, o tienen potencial para mejorar, la calidad de vida de la población que vive en los barrios populares. La definitiva resolución de las contradictorias dinámicas que anidan en el proceso participativo sigue siendo incierta, por lo cual es necesario que se tome conciencia de su crucialidad y se incorpore al debate y al balance que todos debemos hacer al ejercer nuestro voto en noviembre. Si queremos una democracia enraizada abajo, donde las presiones de arriba no debiliten la independencia y capacidad de interlocución y control de las organizaciones sociales sobre quienes ejercen el poder, debemos apoyar la escogencia de candidatos preparados y con sensibilidad para la gestión en los niveles descentralizados y expresar mediante nuestra presencia en los centros de votación la importancia que le damos al principio de la descentralización del Estado.